

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE “MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS DE INMUEBLES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO”

1. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

Esta Consejería de Economía, Hacienda y Empleo es competente para la preparación del presente contrato en virtud de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y demás normativa aplicable, que le atribuye la competencia en materia de patrimonio.

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se exponen a continuación las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato de referencia, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas:

El objeto del contrato de referencia consiste en la prestación de los servicios de asesoramiento y mediación en los contratos de seguros privados relativos a los inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid en los términos y condiciones recogidas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, con carácter general, las competencias a que se refiere el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, y demás normativa aplicable y, en particular y en materia de patrimonio, el aseguramiento de los riesgos derivados de la tenencia, uso y explotación de los bienes inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Con el objeto de proteger los intereses patrimoniales y económicos que derivan del uso y titularidad de bienes inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo es necesaria la contratación de un servicio de aseguramiento de los riesgos de daños materiales por el uso y explotación de esos bienes inmuebles.

Para conocer la oferta del mercado de seguros respecto a las coberturas y riesgos que se requieren y a las necesidades específicas que pueden plantear las características de determinados inmuebles, es conveniente acudir a los servicios de aquellas empresas conocedoras del mercado de seguros privados y que en base a esos conocimientos colaboren en la elaboración de los Pliegos que conformarán los contratos de seguros privados que se prevea realizar.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0964002029283911715122

A ello debe añadirse la dificultad que supone para esta Consejería el dedicar medios materiales y personales al seguimiento de la resolución de los siniestros que pueden darse en los inmuebles que tiene adscritos, algunos de los cuales son de uso por parte de terceros. Es necesario por tanto también que esa mediación incluya los servicios de asistencia e intermediación en la gestión de las pólizas de seguro privado y en el seguimiento de toda la siniestralidad que acontezca relativa a esos ámbitos de cobertura, desde que se comunican hasta su resolución, o en su caso, abono de la indemnización que corresponda.

Actualmente, la realización de estas actuaciones las lleva a cabo por T.A.T. MEDIADORES, S.L. (N.I.F. B80718711) e inscrita en la Dirección General de Seguros con la clave J-1890, la cual fue contratada por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para prestar el servicio de "Asesoramiento y Mediación de seguros privados de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda", en virtud del contrato de 2 de septiembre de 2022, existiendo antecedentes de contratos análogos desde el año 2014.

De conformidad con lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del citado contrato, su duración sería de dos años, prorrogables previo mutuo acuerdo de las partes, con una duración máxima de 4 años prórrogas incluidas, y actualmente está en vigor la segunda y última prórroga prevista para ese contrato, cuya vigencia finaliza el 1 de septiembre de 2026.

En concreto ese objeto comprende los siguientes servicios a desarrollar:

- Colaboración y asesoramiento en la evaluación de necesidades de seguros privados relativos a los inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en la elaboración de los Pliegos que conformarán los contratos de seguros privados que esta prevea realizar.
- Asistencia e intermediación en la gestión de las pólizas de seguro privado que se suscriban al efecto y en el seguimiento de toda la siniestralidad que acontezca relativa a esos ámbitos de cobertura.

Tal y como dispone el artículo 30.3 de la LCSP, *"la prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente Ley"*.

La actividad de distribución de seguros es la que constituye el objeto del presente contrato de mediación, entendida como actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración del contrato de seguro, así como la asistencia posterior en la gestión y ejecución de este contrato, incluida la asistencia en caso de siniestro.

Dado que, por parte de esta Dirección General, no se cuenta con medios personales ni materiales para el desarrollo de estas funciones, debe acudir a la contratación de los servicios que resulten necesarios para ello, dentro del marco establecido por la LCSP. Por ello, de



conformidad con lo establecido en su artículo 116.4 f), se informa de la necesidad de tramitar el presente contrato.

2. DURACIÓN.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, el contrato proyectado tendrá una duración de un (1) año, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales.

Se entiende que el plazo de un (1) año es el más adecuado para satisfacer las necesidades de la Administración, considerando principalmente la flexibilidad que conlleva y la posibilidad de evaluación periódica del servicio. No existe una normativa específica que obligue a esta duración; sin embargo, resulta una práctica común que responde a motivos prácticos y de facilidad en gestión y que permite evaluar la eficacia de la prestación antes de considerar una renovación.

3. DIVISIÓN EN LOTES.

Conforme a lo establecido en el artículo 99.3 de la LCSP, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. No obstante, podrá no realizarse esa división cuando existan motivos válidos para ello, entre los que se encuentran los señalados en su apartado b): *“El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución de una pluralidad de contratistas diferentes.”*

El objeto del contrato de referencia consiste en la prestación de los servicios de asesoramiento y mediación en los contratos de seguros privados relativos a los inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, en los términos y condiciones recogidos en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Se considera que la división en lotes de estas actuaciones implicaría una falta de racionalidad técnica y previsiblemente una incorrecta ejecución de la prestación. Por ello, conforme al citado apartado b) del artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no se prevé la realización de esas actuaciones de manera independiente.



4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.

El contrato de referencia no genera gasto alguno para la Comunidad de Madrid puesto que, de acuerdo con el uso y la práctica del mercado, el adjudicatario será retribuido por las entidades aseguradoras con los que se tengan suscritas, o se vayan a suscribir, contratos de seguros, mediante el pago de comisiones con cargo a las primas netas de esos contratos, y cuyo porcentaje a aplicar forma parte de la oferta que presentan los licitadores.

Esas comisiones no podrán ser ni inferiores al 5% ni superiores al 15% de la prima neta de la póliza o pólizas de seguros que se contraten, o estén vigentes en el momento de la formalización del contrato. Se entiende por prima neta la prima total de la póliza menos impuestos y recargos que fueran procedentes.

A efectos meramente orientativos y de referencia, teniendo en cuenta que la póliza de daños materiales en relación al uso y explotación de inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo tienen una prima meta anual de 112.000,37 euros, correspondiente al presupuesto de licitación de 145.000,00 euros, las retribuciones a percibir por el adjudicatario se estima que no excederán de 16.800,06 euros anuales, si consideramos el 15% correspondiente al porcentaje máximo que puede ofertar cada licitador.

Dado que la duración del contrato es de 1 año, con la posibilidad de prorrogarse como máximo otros cuatro, puede cifrarse el valor estimado en 84.000,28 euros.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, en aplicación del artículo 131.2 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. El procedimiento abierto, que debe utilizarse ordinariamente, como establece el artículo citado, garantiza una mayor concurrencia y es el que menos limita la participación de los empresarios.

En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación.

Para la adjudicación de los servicios de “Mediación de Seguros Privados de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo” se descarta la utilización de procedimientos con negociación por no darse las situaciones ni concurrir los supuestos enunciados en los artículos 167 y 168 antes señalados. Tampoco es un contrato de servicios especiales de los recogidos en el Anexo IV de la citada LCSP, ni se considera necesario acudir a un procedimiento como el restringido, caracterizado por una previa selección de empresarios habilitados para presentar la oferta.

Por todo ello, se opta por utilizar el procedimiento ordinario abierto. Si bien, dado que el valor estimado del contrato no alcanza la cifra límite establecida, se acude a su tramitación



simplificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP y en la Circular por la que se establecen criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid.

Dada la duración de los servicios y, por tanto, su presupuesto, el contrato no es objeto de regulación armonizada.

6. HABILITACIÓN PROFESIONAL Y CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL O TÉCNICA.

El artículo 74 de la LCSP determina que “para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley”.

En el contrato que se pretende licitar no es exigible la clasificación de los empresarios conforme a los requisitos establecidos para ello en el artículo 77 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la LCSP, los requisitos de solvencia requeridos, así como la capacidad de obrar de las empresas que liciten a este procedimiento, se podrán acreditar mediante la correspondiente certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Calificadas del Sector Público. (CPV: 66518100-5.- Servicio de corretaje de seguros). Conforme al artículo 159 de la LCSP, dicha inscripción resulta necesaria para poder licitar en el presente procedimiento simplificado.

Los empresarios que quieran licitar a la adjudicación del presente contrato deberán acreditar su solvencia a través de los siguientes criterios, los cuales han sido seleccionados al considerar que son proporcionados y permiten obtener una visión de la capacidad de gestión y experiencia de la empresa:

A) Habilitación profesional:

Los licitadores de este contrato, además de cumplir con los requisitos de capacidad y solvencia establecidos, deberán también cumplir con el requisito de tener, como persona física o jurídica, la condición de “Mediador de Seguros” y estar inscritos en el Registro Administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros en los términos previstos en los artículos 131 y 133 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.



B) Solvencia económica y financiera:

Para ello se ha elegido el medio recogido en el artículo 87. 1. a) de la LCSP, donde señala: "Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato".

El criterio de selección será atendiendo al volumen de negocios mínimo anual, referido al año de mayor volumen de negocio dentro de los tres últimos ejercicios liquidados, por importe igual o superior a 84.000,28 euros. Para su valoración, deberá presentar una declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa en la que se haga constar la cifra de negocio referida al año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios concluidos.

C) Solvencia técnica o profesional:

Para su constatación, se ha seleccionado el medio recogido en el artículo 90.1 a) de la LCSP, que establece "Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos."

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Podrán acceder a la adjudicación del contrato las empresas que acrediten la realización en ese periodo de al menos un contrato del mismo o análogo objeto o naturaleza por un importe igual o superior a 16.800,06 euros.

Junto a esa acreditación de solvencia, y al amparo de lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, los licitadores deberán adquirir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ello, que se han determinado en los pliegos como equipo mínimo de trabajo.

Este compromiso, que se considera una obligación esencial del contrato a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, deberá acreditarse mediante una declaración responsable del



representante legal en la que se indique el número de trabajadores ofertados, recogiendo con respecto a cada uno de ellos la experiencia y la relación laboral con el licitador, mediante la aportación de los contratos de trabajo, o de prestación de servicios, y de la documentación acreditativa de la experiencia.

7. MEDIDAS AMBIENTALES EN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.

En la preparación de este contrato se han definido las prescripciones técnicas aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental y teniendo en cuenta las normas de calidad y las mejores técnicas disponibles en materia medioambiental a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Según lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a una mejor relación calidad-precio, la cual se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Por su parte, el artículo 159 de la citada Ley establece que uno de los requisitos para poder adoptar este procedimiento (abierto simplificado) es que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante un juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en los que su ponderación no podrá superar el 45% del total de la puntuación.

Para la adjudicación del contrato del servicio de mediación de seguros privados relativos a los inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se han establecido varios criterios, todos ellos de valoración objetiva y automática:

- Criterio económico: hasta 75 puntos.

Las empresas licitadoras deberán presentar una oferta sobre los porcentajes de comisión por los que ofrecen sus servicios.

Este contrato no genera gasto alguno para la Comunidad de Madrid, siendo el adjudicatario retribuido por las entidades aseguradoras con las que se tengan suscritas o se vayan a suscribir contratos de seguros, mediante el pago de comisiones con cargo a las primas netas de esos contratos.

Esas comisiones no podrán ser ni inferiores al 5% ni superiores al 15% de la prima neta de las pólizas de seguros. Se entiende por prima neta la prima total de la póliza menos impuestos y recargos que fueran procedentes.



En el Anexo que se adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas se recoge información sobre los inmuebles objeto de cobertura, por cada uno de los riesgos actualmente asegurados, y de los importes de las correspondientes pólizas.

La puntuación de los porcentajes ofertados se realizará de la siguiente manera:

Porcentaje de comisión	Puntos
5 %	75
6 %	70
7 %	65
8 %	60
9 %	55
10 %	50
11 %	45
12 %	40
13 %	35
14 %	30
15 %	25

- Criterio evaluable de manera automática – Mejora del equipo técnico: hasta 25 puntos.

Se valorarán las mejoras respecto al número de integrantes de cada uno de los equipos de trabajo por encima de los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Este criterio se valorará conforme a la siguiente puntuación:

Equipo de trabajo	Mediador de Seguros Agregado	Puntos
EQUIPO 1	1 mediador	6,25
	2 mediador	12,5
EQUIPO 2	1 mediador	6,25
	2 mediador	12,5

Los licitadores deberán presentar cumplimentando el modelo anexo a esta memoria con los mediadores adicionales, ofertados por encima del equipo mínimo solicitado en los pliegos del contrato.

El adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo o de prestación de servicios correspondientes a estos equipos, así como la acreditación de la formación requerida para el mediador, que será la correspondiente al Nivel 1 (antiguo Grupo A) definida en el Decreto



287/2021, que establece tres niveles de formación obligatoria según la responsabilidad y funciones del profesional. La posesión del diploma de Mediador de Seguros Titulado, creado por la derogada Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, surtirá los mismos efectos que la superación del curso de formación exigido para el nivel 1 del artículo 7.1. del Real Decreto 287/2021, que establece tres niveles de formación obligatoria según la responsabilidad y funciones del profesional.

El incumplimiento de la posible mejora ofertada por la empresa podrá ser causa de resolución del contrato.

9. GARANTÍAS EXIGIBLES.

9.1. Garantía provisional: No es necesaria su constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.

9.2. Garantía definitiva: Conforme al artículo 107.1 párrafo segundo de la LCSP, en los contratos de carácter privado podrá eximirse la prestación de garantía definitiva por el adjudicatario. Por las características del objeto del contrato no se estima necesaria la exigencia de esta garantía.

9.3. Garantía complementaria: No se prevé su exigencia.

10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

No se prevé ni es un requisito exigible dadas las características de este contrato, de carácter privado y no sujeto a regulación armonizada.

11. SUBCONTRATACIÓN.

Los adjudicatarios podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal.

12. MODIFICACIONES.

Dadas las características y objeto del contrato no se prevén modificaciones.

13. PENALIDADES.

No procede.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964002029283911715122**

14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Son causas de resolución del contrato, además de las previstas legalmente, las siguientes:

- a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de su personalidad jurídica.
- b) La desaparición de las garantías del contratista o su insuficiencia, a menos que sean sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras.
- c) La cesión de derechos y obligaciones del contrato a un tercero sin consentimiento expreso de la Fundación.
- d) El incumplimiento del contratista de su deber de confidencialidad.
- e) La pérdida de algún requisito legal para ostentar la condición de mediador de seguros, por sanción administrativa o por incurrir en las incompatibilidades o prohibiciones recogidas en la Ley.
- f) La venta o transferencia de la cartera de seguros a cualquier otro mediador de seguros.
- g) La incursión de uno o varios de los administradores o directores gerentes en causa de incompatibilidad o inhabilitación para el ejercicio profesional de mediador.
- h) La comisión de conductas recogidas como infracciones graves o muy graves en la normativa de mediación en seguros privados.
- i) No ajustarse el contratista a las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la causa de resolución fuese imputable al contratista este responderá de los daños y perjuicios ocasionados.

En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgada por la Administración, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.

15. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

El objeto del contrato de referencia consiste en la prestación de los servicios de asesoramiento y mediación en los contratos de seguros privados relativos a los inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, en los términos y condiciones recogidas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

En concreto, ese objeto comprende los siguientes servicios a desarrollar:



- Colaboración y asesoramiento en la evaluación de necesidades de seguros privados relativos a los inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, en la elaboración de los pliegos que conformarán los contratos de seguros privados que esta prevea realizar.
- Asistencia e intermediación en la gestión de las pólizas de seguro privado que se suscriban al efecto y en el seguimiento de toda la siniestralidad que acontezca relativa a esos ámbitos de cobertura.

Tal y como dispone el artículo 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, "la prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente Ley".

La actividad de distribución de seguros es la que constituye el objeto del presente contrato de mediación, entendida como actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración del contrato de seguro, así como la asistencia posterior en la gestión y ejecución de este contrato, incluida la asistencia en casos de siniestro.

Dado que por parte de esta Dirección General no se cuenta con medios personales ni materiales para el desarrollo de estas funciones, debe acudir a la contratación de los servicios que resulten necesarios para ello dentro del marco establecido por la citada LCSP. Por ello, de conformidad con lo establecido en su artículo 116.4 f), se informa de la necesidad de tramitar el presente contrato.

16. REVISIÓN DE PRECIOS.

No procede revisión de precios.

17. NO PREVISIÓN DE PLAZO DE GARANTÍA.

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato, se considera que no procede aplicar un plazo de garantía posterior a su ejecución para poder eximir al contratista de la responsabilidad de su adecuado cumplimiento.

Madrid, a fecha de firma
LA DIRECTORA GENERAL DE
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN



ANEXO

MEJORAS RESPECTO AL NÚMERO DE INTEGRANTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

D./Dña, con DNI/NIE en nombre propio o en representación de la empresa, con NIF nº, en calidad de, en relación con el contrato de

DECLARA:

Que para la ejecución del contrato “MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS DE INMUEBLES DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO ” oferta las siguientes mejoras en los equipos de trabajo establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

Equipo de trabajo	Número de mediadores adicionales (Marcar con una X lo que proceda)
Equipo 1	1 mediador ()
	2 mediadores ()
Equipo 2	1 mediador ()
	2 mediadores ()

En, a de de

Fdo:

